

joseph collins

estudio de un caso: la guerra económica contra chile

"Es inequívocamente claro que el gobierno de los Estados Unidos y todos los elementos del gobierno de los Estados Unidos no estuvieron —repítase no estuvieron— implicados."

**Informe del Departamento de Estado,
12 de septiembre de 1973**

Desde el 11 de septiembre, día del golpe militar ultraderechista en Chile, portavoces del gobierno de los Estados Unidos han estado prácticamente tropezándose unos con otros para decirle al mundo que esta vez los Estados Unidos no tuvieron nada que ver con el derrocamiento de un gobierno constitucional. La Casa Blanca, el Departamento de Estado y hasta la Agencia Central de Inteligencia han hecho públicas declaraciones negativas categóricas. Es evidente que al presentar esas negativas, el gobierno libra una batalla contra la corriente. El laberinto de mentiras y disimulaciones expuesto en las audiencias de Watergate ha creado un clima en el que la tendencia general es esperar lo peor del gobierno y no creer ninguna de sus declaraciones. Sin embargo, en este caso, las negativas parecían plausibles —si se las toma tan literalmente como querían los portavoces. El gobierno de los Estados Unidos evidentemente no "intervino" en Chile con acorazados o marines.

Sin embargo, hay otras formas de intervención "más limpias". La doctrina del "perfil bajo" practicada por Nixon y Kissinger toma en cuenta que nuevas condiciones internas e internacionales obligan a los Estados Unidos a alcanzar sus objetivos imperialistas por otros medios; en el mundo posterior a la guerra de Vietnam la diplomacia de los acorazados sólo sería contraproducente.

En el caso de Chile, el envío de infantes de marina norteamericanos no habría sido sino una forma segura de consolidar el apoyo al gobierno de Unidad Popular de Allende. Además, hubiera forzado seriamente las relaciones del gobierno y los negocios norteamericanos con el resto del mundo, y dentro de los Estados Unidos, hubiera provocado una expresión pública de oposición que podría haber llegado a superar a la que siguió a la invasión de Camboya, y el Congreso podría haber sido empujado a actuar contra el presidente. Así, el 15 de septiembre de 1973 el Departamento de Estado instruyó al embajador Korry para “hacer todo lo posible —salvo una acción tipo República Dominicana—” para impedir la toma de posesión de Allende.¹

La doctrina del “perfil bajo” de Nixon-Kissinger supone que los Estados Unidos tienen a su disposición otros medios “más limpios” y “más seguros” que la intervención armada. Las tácticas del perfil bajo incluyen “asociaciones maduras” con fuerzas locales opuestas a la liberación del desarrollo económico y político de un país del control de las empresas transnacionales y del gobierno de los Estados Unidos (por lo general esas fuerzas locales comprenden principalmente hombres de negocios “desnacionalizados”, quienes en su mayoría son socios de empresas transnacionales, y militares que, teóricamente, pueden ser convertidos en casi mercenarios mediante la ayuda militar, el asesoramiento y las “maniobras conjuntas”). Además, el Ejecutivo puede utilizar poder financiero gubernamental y privado para lograr sus fines (una política de perfil especialmente bajo, tal como la recomendada en el **Rockefeller Report on the Americas**, que actúa a través del perfil prismático de instituciones “multilaterales”), o bien los administradores del Ejecutivo pueden utilizar la fuerza de miles de millones de dólares de la CIA, coordinada por medio del Comité de Operaciones Encubiertas del Consejo Nacional de Seguridad, presidido por el doctor Kissinger.

La estrategia de “perfil bajo” en Chile fue, esencialmente, un estrangulamiento de la economía chilena a la distancia del largo del brazo. Los registros demuestran de forma inequívoca que la administración norteamericana esperaba exacerbar las condiciones económicas en Chile, creando así el clima propicio a la subversión y la sedición internas. En un cable secreto al Departamento de Estado, publicado el 28 de marzo de 1972 por el columnista Jack Anderson, el embajador norteamericano Nathaniel Davis sugería que para llevar a cabo un golpe militar, primero sería necesario crear un “descontento tan grande que la

¹ Memorandum de la ITT, revelado por Jack Anderson y publicado en “Secret Memos from ITT”, en *NACLA's Latin American and Empire Report*, abril de 1972. El negro es mío.

intervención militar sea invitada en forma abrumadora". Para ayudar a impulsar ese "descontento", la administración de Nixon empleó no sólo instituciones financieras gubernamentales, sino también su enorme peso en las compañías financieras multilaterales y privadas y su influencia por estrechos vínculos con empresas globales. También estaba asegurada la cooperación experimentada y coordinada de los oligarcas económicos chilenos: indudablemente, la sociedad era "madura".

La guerra económica contra la administración de Allende presentaba todos los signos característicos de un plan de juego ganador. Cuando Allende fue electo, Chile ya padecía de una crisis económica crónica. Durante las dos administraciones anteriores, la economía chilena había sido mantenida en pie por la ayuda masiva del gobierno de los Estados Unidos, en parte porque todavía era un centro de operaciones beneficioso y hospitalario para compañías basadas en los Estados Unidos, a pesar de sus males económicos. La economía chilena dependía de un flujo enorme e ininterrumpido de importaciones —incluyendo el 30 por ciento de la alimentación, maquinaria y refacciones—, buena parte de las cuales sólo podían obtenerse en los Estados Unidos. Chile sólo contaba con un producto de exportación básico, el cobre, y su precio en el mercado internacional se desplomaba rápidamente.

Además de esta situación, la Coalición de Unidad Popular de Allende había heredado de la era de la Alianza para el Progreso la segunda deuda externa más alta del mundo (alrededor de 4 mil millones de dólares), cuya parte principal vencería pronto. Finalmente, la coalición de Allende, sin el control o la cooperación del Congreso y con un poder judicial y unas Fuerzas Armadas prejuiciadas en favor de la propiedad privada y las inversiones extranjeras, apenas contaba con el poder gubernamental, factor esencial en caso de que hubiese sido preciso resistir internamente a la guerra económica externa. Por eso, Chile era una víctima predestinada. Y ya que el tipo de bloqueo económico invisible establecido por la estrategia de "perfil bajo" del gobierno de los Estados Unidos exigía fundamentalmente medidas negativas, el golpe fascista en Chile bien podría haber sido el que resultara más barato al gobierno norteamericano. (Si bien, como el tiempo lo demostrará, mantener en el poder a la Junta Militar podría resultar bastante más caro.)

La guerra económica realizada con la táctica de "perfil bajo" a distancia tenía otra ventaja de igual importancia: la de ser prácticamente "invisible" para la opinión pública norteamericana. Utilizaba las técnicas y las herramientas de las finanzas internacionales, tema que en pocas ocasiones discuten y comprenden los no economistas; en los noticiarios de la noche, no

aparecen imágenes de un bloqueo económico invisible. Sus armas pueden disfrazarse fácilmente de operaciones financieras legales, legítimas y "cotidianas". De hecho, en los Estados Unidos no existen debates públicos acerca de la economía de países subdesarrollados, ni sobre los méritos de la expropiación y su racionalidad legal y económica. La guerra económica de "perfil bajo" ofrece al Ejecutivo un poder nuevo y más sutil, muy alejado de las limitaciones de hasta la **War Powers Act** más violenta.

En 1971, los procesos internos del Chile de Allende y de la administración de Nixon colocaron a ambos en posición de choque. En julio de 1971, el Congreso chileno —aunque controlado por los partidos de oposición, Nacional y Demócrata Cristiano— aprobó unánimemente una enmienda constitucional que establecía la nacionalización de todas las minas de cobre por la administración de Allende. En sólo sesenta años, las ricas reservas de cobre de Chile habían producido para las empresas cupríferas norteamericanas (entre cuyos principales accionistas se contaban los grupos financieros Rockefeller y Morgan) el equivalente de más de la mitad de todo el capital chileno acumulado en los cuatrocientos años anteriores. El voto unánime por la enmienda de nacionalización reflejaba el sentimiento popular ampliamente difundido de que el país había sido saqueado. La enmienda preveía compensaciones a las firmas norteamericanas "según su valor contable, menos los principales impuestos, la depreciación y deducciones por obsolescencia, filones agotados y beneficios excesivos".

El Congreso estipuló que la Oficina del Interventor General —algo semejante a una combinación de la Suprema Corte y la Oficina Contable del Gobierno de los Estados Unidos— determinaría los "beneficios excesivos" mediante el cálculo de las utilidades declaradas entre 1955 y 1971 que superaran el rédito del diez por ciento, considerado normal en Chile. Los miembros de la Oficina del Interventor, que habían sido designados antes de la administración de Allende,² estimaron cuidadosamente los hechos de cada situación, mina por mina, empresa por empresa, y acordando finalmente el total del valor contable a dos minas nuevas (una de propiedad de la Cerro y otra de la Anaconda), pero encontraron que en las demás minas, los beneficios obtenidos por Kennecott y Anaconda ya habían superado con mucho (774 millones de dólares) el total del valor contable.*

² Cfr. la entrevista con el presidente de Cerro Corporation, C. Gordon Murphy, en **Business Week**, 9 de diciembre de 1972: "El tribunal es completamente independiente del presidente, puedo asegurárselo."

* Es preciso señalar que la inversión de capital de Kennecott y Anaconda era muy inferior al valor contable de las minas. La empresa había planeado también recuperar sus "pérdidas" mediante un seguro del gobierno de los Estados Unidos por 121

La declaración chilena de que los recursos de cobre de Chile pertenecían a éste coincidió con una crisis importante en la economía norteamericana. Era evidente que era preciso tomar alguna medida con respecto a la inflación, el desempleo, una balanza de pagos negativa y la especulación general contra el dólar. Aunque muchos argumentaban que algunas grandes empresas norteamericanas eran responsables de las dificultades nacionales, la atmósfera de crisis brindaba a los intereses empresariales la perfecta oportunidad de afirmarse en contra de todos los defensores de una respuesta "moderada" o "flexible" al "nacionalismo económico" extranjero.

La posición ideológica era clara: la economía norteamericana estaba en dificultades y sólo podría salvarse proporcionando apoyo total a las empresas norteamericanas que operaban en el extranjero. El secretario del Tesoro Asistente John Petty, figura clave en la determinación de la política norteamericana hacia Chile, lo expresó de forma sucinta: "Creo que encontrarán a los Estados Unidos menos dispuestos a volver la otra mejilla. Éste es un juego de pelota nuevo, con reglas nuevas." Otro funcionario de alta jerarquía del Tesoro reflejó la misma "línea dura": "Ha llegado el momento de defender nuestros propios intereses —tanto económicos como políticos."³ Al mismo tiempo, Peter Peterson, expresidente de Bell and Howell y posteriormente asistente del presidente para la Política Económica Internacional, publicó un informe importante reclamando una política activa por parte del gobierno de los Estados Unidos para proteger y expandir las actividades de los negocios norteamericanos en el extranjero. El secretario del Tesoro Connally apoyó la asociación de los negocios con el gobierno y su línea dura en una serie de discursos y entrevistas.⁴

La introducción de la Nueva Política Económica de Nixon en agosto de 1971 desplazó la responsabilidad de la formulación de la política exterior referente a América Latina, del Departamento de Estado, al Departamento del Tesoro.* Hasta la aparición de la

millones de dólares y la condonación de impuestos por la cantidad restante gracias a una discutible autorización del Departamento del Tesoro para reclamar las pérdidas como pérdidas "corrientes" de negocios antes que como pérdidas de capital —una diferencia de cientos de millones de dólares.

3 Mark L. Chadwin, "Foreign Policy Report: Nixon Administration Debates New Position Paper on Latin America", en **National Journal**, 1a. parte, 15 de enero de 1972, p. 97.

4 Véase, por ejemplo, Frank K. Fowlkes, "Economic Report/Connally revitalizes Treasury. Assumes Stewardship of Nixon's New Economic Policy", **National Journal**, vol. 11, 2 de octubre de 1971, p. 1991.

* Es interesante observar el paralelismo histórico entre las situaciones de Cuba y Chile en cuanto a la formación de la política norteamericana. El exembajador en Cuba, Philip W. Bonsal, ha escrito que el Departamento del Tesoro, bajo el secretario Robert Anderson, "dio la orden de abrir el fuego" en la definición y puesta en prác-

NEP y la "Crisis" chilena concomitante, América Latina parecía tener una escasa importancia en la administración de Nixon; por lo general, la administración del "Servicio Exterior" de los países latinoamericanos era destinada al Departamento de Estado y a su secretario encargado, William Rogers.⁵ En ese papel, el Departamento de Estado tendía a tomar más en cuenta cuestiones diplomáticas y políticas que la simple cuestión de los beneficios de los negocios norteamericanos. En el caso de Chile existen una serie de indicios de que inicialmente el Departamento de Estado tomó una "línea blanda".⁶

El **National Journal** informó que al principio Kissinger estuvo en favor de una actitud relativamente moderada hacia las expropiaciones chilenas, mientras que Peter Peterson proponía una línea más dura para desalentar a otros gobiernos de emprender acciones similares.⁷

Por otra parte, tanto las decisiones como quienes las toman en el Departamento del Tesoro, estaban por lo general más estrechamente vinculados a los intereses empresariales y banqueros norteamericanos que los del Departamento de Estado.* Ha llegado a considerarse "natural" que altos ejecutivos y abogados de bancos y empresas realicen su "servicio social" trabajando por algún tiempo como altos funcionarios del Departamento del Tesoro. No es sorprendente, pues, que los intereses y la política de los Estados Unidos se definan invariablemente en términos de la promoción y protección de las posesiones de las empresas norteamericanas.

Ciertamente, el Departamento del Tesoro, regido por el secretario Connally, no era excepción a esta regla. Cuando Chile se atrevió a intentar lograr un mínimo de libertad de la dominación financiera extranjera, se encontró con los mismos gigantes financieros trabajando desde la rama ejecutiva y dictando la política exterior de los Estados Unidos. Algunos de los funcionarios del Tesoro que desempeñaron un papel clave en la determinación de la guerra económica de los Estados Unidos contra Chile fueron:

tica de la posición norteamericana hacia Cuba antes de la ruptura. Cfr. Philip W. Bonsal, *Cuba, Castro and the United States*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1971.

5 Esa baja prioridad fue confirmada en entrevistas a funcionarios del Departamento de Estado de James Petras y Robert LaPorte, Jr., "Chile: No", **Foreign Policy**, verano, 1972.

6 Chadwin, *op. cit.*, 2a. parte, p. 152; Petras y LaPorte, *passim*.

7 Dom Bonafede, "Peterson Unites Helps Shape Tough International Economic Policy", **National Journal**, vol. III, 13 de noviembre de 1971, p. 2245.

* **The Socio-Economic Career Patterns of 30 Persons Who Shaped U. S. Policy Toward Latin America**, de Kraig Schwartz, revela que el 70 por ciento de los creadores de política claves en un reciente periodo de cinco años pertenecían al mundo de los negocios empresariales antes de ocupar sus cargos.

John M. Hennessey, antes gerente general del First National City Bank en Lima y La Paz; John R. Petty, anteriormente vicepresidente del Chase Manhattan Bank y en la actualidad socio de Lehman Brothers; Paul A. Volcker, ex-ejecutivo del Chase Manhattan Bank; Charles E. Walker, ex-asistente especial del presidente del Republic National Bank de Dallas y también vicepresidente ejecutivo y principal cabildero de la American Bankers Association.

Con el secretario del Tesoro Connally como administrador de la Nueva Política Económica, la orden del día era cualquier cosa, menos “moderación” y “flexibilidad”. Connally, con acceso especial al presidente Nixon, tuvo éxito en imponer la “línea dura” contra Chile como política de todo el Ejecutivo. Como concluyen los profesores Petras y La Porte: “Una vez definida la política por iniciativa de Connally, el Departamento de Estado se desplaza a la posición extrema, dejando de lado sus reservas y su ‘flexibilidad’.”⁸

Para octubre de 1971, el secretario de Estado Rogers había adoptado la línea dura de los negocios. En una reunión cerrada tranquilizó a los ejecutivos de varias empresas norteamericanas —como la ITT, Ford, Anaconda, Ralston Purina, el First National City Bank y el Bank of America— amenazadas por las nacionalizaciones chilenas: “La administración de Nixon es una administración de negocios. Su misión es proteger los negocios norteamericanos.” Con ese fin, aclaró Rogers, los Estados Unidos “suspenderían la ayuda a menos que él (Chile) ofrezca una compensación inmediata”. Cuando incluso algunos de los ejecutivos preguntaron a Rogers si esa línea dura no podría ser interpretada como una “bofetada” a Chile y otras naciones latinoamericanas, éste respondió que “es posible que esas medidas sean el único lenguaje que entiendan”.⁹

En una entrevista brusca, el secretario Connally afirmó: “Los Estados Unidos pueden permitirse ser rudos con América Latina porque ya no nos queda ningún amigo allí...”¹⁰ **Business Week** informó: “Connally está forzando la reapertura del debate al nivel más alto sobre cuál debería ser la política de los Estados Unidos. Lo amargá particularmente la hostilidad latinoamericana a las inversiones norteamericanas...”¹¹ Un artículo del **New York Times** concluía que la estrategia de Connally con respecto a Chile no era otra cosa que la versión de negocios de una teoría de dominó militar: “Se dice que el señor Connally cree que su

8 Petras y LaPorte, *op. cit.*

9 Cfr. Benjamin Welles, **The New York Times**, 23 de octubre de 1971.

10 **New York Times**, 15 de agosto de 1971.

11 **Business Week**, 10 de julio de 1971.

política de 'disuasión' —apretarle los tornillos a Chile— puede asustar a otros potenciales expropiadores."¹² Petras y La Porte, en sus extensas entrevistas realizadas en el Departamento de Estado a fines de octubre de 1971, encontraron que "el Departamento de Estado no había sido consultado con frecuencia desde la crisis de la nacionalización del cobre".¹³

En la era de la táctica de "perfil bajo", el Departamento del Tesoro se había convertido en creador y ejecutor central de política exterior; como comentó un funcionario del Departamento de Estado "...la Tesorería está teniendo una ingerencia (en la política exterior de los Estados Unidos) que no había tenido en el pasado".

Después de la nacionalización del cobre en Chile, el **National Security Study Memorandum 131** ordenó que varias agencias estudiaran políticas presentes y futuras relativas a expropiaciones. La línea dura del Departamento del Tesoro predominó en el Consejo de Política Económica Internacional. El 19 de enero de 1972, el Ejecutivo esbozó y presentó una declaración política de importancia, que evidentemente se refería a las recientes expropiaciones chilenas:

Así, cuando un país expropia intereses norteamericanos de importancia sin proveer compensaciones razonables para los ciudadanos norteamericanos, supondremos que los Estados Unidos no extenderán nuevos beneficios económicos bilaterales al país expropiador... Frente a las circunstancias expropiatorias que hemos descrito, supondremos que el gobierno de los Estados Unidos retirará su apoyo a los préstamos a consideración de los bancos multilaterales de desarrollo.

Una de las primeras acciones de la guerra económica iniciada por el Ejecutivo contra Chile se puso en práctica por medio del Banco de Exportaciones e Importaciones del Departamento del Tesoro. Normalmente, países como Chile adquieren maquinaria y materias primas a compañías norteamericanas con créditos a plazo corto o medio, que en parte se pagan con el producto de la venta de artículos del comprador. Esos créditos —de los que comúnmente se habla como la "grasa" del comercio internacional— provienen del Banco de Exportaciones e Importaciones del Departamento del Tesoro y de préstamos de bancos norteamericanos privados, garantizados por el Eximbank. Tradicionalmente, Chile importaba alrededor del 40 por ciento del total de sus importaciones de los Estados Unidos; en los 25 años anteriores al

12 *New York Times*, 15 de agosto de 1971.

13 Petras y LaPorte, *op. cit.*

gobierno de Allende, Chile recibió 600 millones de dólares en créditos directos del Eximbank.

El Eximbank rechazó la primera solicitud de un préstamo de la administración de Allende —de 21 millones de dólares— para financiar parte de la compra de tres aviones Boeing a chorro de pasajeros para la empresa estatal LAN-Chile. En el pasado, Chile siempre había obtenido crédito para esa empresa y había pagado sus deudas en forma impecable. En el momento de la solicitud (comienzos de 1971), funcionarios norteamericanos admitieron que el país andino liquidaba sus deudas escrupulosamente, hecho que fue confirmado por una admisión oficial del Departamento de Comercio; así, la “honorabilidad crediticia” de Chile no era el verdadero problema;¹⁴ evidentemente, la decisión de rechazar la solicitud fue política.

En agosto, el presidente del Eximbank, Henry Kearns, informó al embajador chileno en Wáshington que Chile no podría obtener más préstamos ni garantías hasta que las cuestiones de la compensación por los intereses mineros y otros de los Estados Unidos en Chile fuesen resueltas. Según un artículo del **New York Times** (10. de agosto de 1971), el Departamento de Estado indicó que la decisión de bloquear los préstamos del Eximbank a Chile fue “tomada a nivel de la Casa Blanca”, bajo presión de algunas compañías norteamericanas.

El Eximbank no sólo impidió a Chile obtener nuevos créditos para compras urgentes en los Estados Unidos, sino que además detuvo los pagos de los préstamos directos negociados con anterioridad. Aparte de eso, suspendió el programa de garantías y seguros para bancos comerciales y exportadores (mediante una filial del Eximbank, la Asociación Aseguradora del Crédito Exterior, FCIA). Proveedores y bancos privados siguieron inmediatamente la línea del Departamento del Tesoro propugnada por el Eximbank. Ese corte del crédito a corto plazo fue equivalente al bloqueo formal de Cuba, sólo que de “perfil bajo”, y por eso no corría el riesgo de ser atacado por el Congreso o la opinión pública.

El impacto en Chile fue devastador: para 1972, no sólo las importaciones de Chile habían declinado, sino que el porcentaje de importaciones procedentes de los Estados Unidos descendió del 40 a alrededor del 15 por ciento.¹⁵ La falta de piezas de recambio para la maquinaria de origen norteamericano (que formaba la mayor parte de la maquinaria chilena) produjo serios estrangulamientos de la producción. La forzada disminución de

14 **Wall Street Journal**, 4 de junio de 1971.

15 Banco Mundial, IDA e IFC, “Policies and Operations”, Wáshington, junio de 1969, p. 3.

las importaciones afectó en especial a la clase media, que estaba habituada a importar bienes y servicios. (La extensa clase baja experimentó una efectiva mejora en el acceso a los bienes básicos,¹⁶ y la clase alta desarrolló un mercado negro floreciente que el presidente Allende no podía eliminar, puesto que los partidos de oposición que controlaban el Congreso apoyaban básicamente el plan de provocar el caos económico.) El impacto más serio tuvo lugar en el sector del transporte, debido a que un gran porcentaje de los camiones y autobuses eran modelos Ford o GM. Ya a comienzos de 1972, el 30 por ciento de los "microbuses" de propiedad privada, el 21 de los taxibuses y el 33 de los autobuses de propiedad estatal estaban inmovilizados por falta de piezas.¹⁷ Los propietarios de camiones —cuya huelga contribuyó en gran medida a desencadenar la crisis que sirvió de pretexto para el golpe— con frecuencia citaban la imposibilidad de obtener repuestos para sus camiones como motivo de la huelga.

Instituciones "multilaterales"

La administración de Nixon utilizó su fuerza en las llamadas instituciones multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, para imponer políticas planeadas para estrangular la economía chilena. El gobierno de Allende continuaba pagando a los bancos los créditos anteriores, pero ninguna institución le concedió otro préstamo a su país.

En el BID los representantes del Ejecutivo norteamericano tienen poder de veto sobre los préstamos. (Los Estados Unidos tienen el 40 por ciento de los votos y se necesita la votación de los dos tercios para aprobar un préstamo.) Desde 1959 hasta la elección de Allende, el BID concedió a Chile un número excepcional de préstamos —59, por un total de 310 millones de dólares. En 1971, el gobierno de Allende solicitó varios, algunos de los cuales fueron considerados para su examen preliminar por una misión especial del BID que visitó Chile en junio de 1971. En esa época, los representantes del banco y las autoridades chilenas acordaron promover un complejo petroquímico —un proyecto "de desarrollo" perfecto, con transferencia de tecnología y capaz de producir ganancias en el intercambio con el exterior; sin embargo, al igual que otras solicitudes razonables y bien investigadas para energía eléctrica y gas natural (líquido), el préstamo nunca fue concedido; incluso, el banco negó ayuda de emergencia para

¹⁶ Cfr. encuestas sobre la oposición —verificadas semanalmente—, **Ercilla**, septiembre de 1972.

¹⁷ **Chile hoy**, 11-17 de agosto de 1972.

las víctimas del terremoto de 1971. A pesar de ello, Chile seguía liquidando puntualmente sus deudas al BID. En 1971 y 1972, Chile devolvió alrededor de 16 millones de dólares, y ya que no se le concedían nuevos créditos, irónicamente se encontró convertido en un auténtico exportador de capital hacia el Banco Interamericano de Desarrollo.

La excusa habitual para no autorizar nuevos créditos a Chile era que este país era "económicamente inestable", poco "digno de crédito", y que se hallaba en una posición de desfavorable intercambio. Y si bien la situación de intercambio chilena se encontraba bastante debilitada por la caída del precio del cobre en el mercado mundial y la fuga de capitales oligárquicos, el bloqueo del crédito por parte de los Estados Unidos era un factor de igual importancia. Supuestamente, la finalidad de la existencia del BID es ayudar a las naciones latinoamericanas a superar problemas económicos, pero, como lo expresaron miembros de su personal: "el BID se está comportando como un paraguas que sólo se abre cuando no llueve".

Los problemas económicos graves de Chile no empezaron con la elección de Allende; el BID había invertido millones en ese país durante crisis económicas anteriores. La única diferencia discernible era que aunque las políticas de anteriores administraciones no pudieran haber resuelto los problemas económicos del país, eran favorables a los intereses de Wáshington y Wall Street.

Las dificultades económicas chilenas no impidieron al BID hacer dos excepciones reveladoras en su boicot a ese país: concedió siete millones de dólares a la Universidad Católica y cuatro y medio millones a la Universidad Austral (localizada en la región conservadora de Chile, de habla predominantemente alemana), ambas baluartes, cada vez más, de actividades en contra de la Unidad Popular, y centros de purgas de sus simpatizantes.

La política del Banco Mundial fue semejante. El gobernador norteamericano del Banco depende del secretario del Tesoro.* Antes de la elección de Allende, esa institución financiera prestó a Chile \$234 650 000 dólares; pero a partir del triunfo allendista, el banco de Robert McNamara rechazó todas las solicitudes de préstamo sin excepción; entre otras, la de un proyecto de plantación de frutales; la de segunda etapa de un programa ganadero (la primera etapa había comenzado bajo el gobierno de Frei con asistencia del Banco Mundial), y la de un proyecto de electrificación en marcha (que había sido apoyado activamente por el Banco desde hacía veinte años).

* El control del ejecutivo norteamericano en el BID y el Banco Mundial no siempre es abierto, dado que los Estados Unidos nunca han votado formalmente contra una solicitud de préstamo, en parte porque las juntas del banco operan por consenso y, por lo tanto, los problemas sobre los cuales hay desacuerdo no llegan a la votación formal.

Es revelador considerar la razón aducida por el Banco para rechazar el proyecto de electrificación. El Banco exigió que el gobierno chileno aumentara las tarifas eléctricas; el gobierno de Allende había adoptado una escala de tarifas favorable a los pobres y pequeños consumidores. El gobierno de la Unidad Popular se negó a modificar políticas fundamentales orientadas hacia los trabajadores sólo para tratar de complacer al Banco Mundial, y el préstamo fue denegado.

En los últimos tres años, el señor McNamara ha deplorado en forma elocuente la política económica de países como el Brasil, que promueven una concentración aún mayor de la riqueza y el ingreso; sin embargo, el Banco continuaba otorgando a este país préstamos masivos enormes, a la vez que cortaba toda asistencia a un gobierno chileno que luchaba por alcanzar los objetivos de desarrollo que McNamara afirmaba defender. No conforme con interrumpir los préstamos, el señor McNamara, apartándose bruscamente de la diplomacia multilateral normal, habló en forma especialmente agresiva en contra del gobierno de Allende y de manera perjudicial para el crédito mundial de Chile.

En contraste con el BID y el Banco Mundial, Chile no tuvo problemas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En 1971 y 1972, el gobierno de Allende recibió 148 millones de dólares del Fondo como compensación parcial por la caída del precio del cobre y de su porción normal de fondos de cuenta corriente. La posición del FMI de manejar los negocios de forma normal con Chile volvía a plantear cuestiones sobre los verdaderos criterios rectores de la actitud del BID y el Banco Mundial. La política del FMI respecto a Chile bien puede atribuirse a la fuerte influencia europea en su seno, y por consiguiente, a la menor de los Estados Unidos. Cuando en 1972 los Estados Unidos intentaron sustituir al presidente del FMI, Pierre-Pau Schweitzer, Chile agrupó en su apoyo a los miembros latinoamericanos.

El Congreso

La posición del Congreso norteamericano no era mejor que la del Ejecutivo. La tendencia general de las audiencias que trataban sobre Chile en la Cámara de Representantes indicaba que los parlamentarios eran favorables a medidas aún más duras para presionar al país andino.¹⁸ Los debates en el Senado sobre los financiamientos del BID¹⁹ demostraron que algunos senadores

18 U. S. House of Representatives, Subcommittee on Inter-American Affairs, **Recent Developments in Chile**, octubre de 1971.

19 "Contributions to the Inter-American Development Bank", **Congressional Record**, vol. 117, núm. 156, pp. S 16580 y ss.

conservadores no estaban seguros de que la administración adoptara una línea suficientemente dura y de que la regla del voto de los dos tercios para los préstamos del BID fuera bastante para garantizar que los Estados Unidos pudieran vetar todos los préstamos a Chile. Por ejemplo, el senador Brock propuso efectuar una enmienda que obligara a todos los gobernadores y directores ejecutivos de las instituciones financieras internacionales norteamericanas a votar en contra de los préstamos a países como Chile. La opinión liberal difería no en relación a los objetivos, sino más bien en cuanto a los medios más efectivos. Argumentando en contra de la enmienda Brock, el senador Fulbright afirmó:

Estoy de acuerdo con la objeción de que nuestras inversiones no deberían ser expropiadas. Debemos protegerlas y hacer todo lo que sea razonable para protegerlas. No creo que este procedimiento sea efectivo y sé que sería sumamente ofensivo para algunos países a los que probablemente se aplique, sencillamente por su dignidad y su respeto propio. Sin embargo, no creo que modifique en forma sustancial la ley actual.

Una pequeña minoría de senadores, en especial Church y Kennedy, expresaron actitudes muy diferentes y hablaron públicamente en defensa del gobierno democráticamente electo del presidente Allende. Como dijo el senador Kennedy al Consejo de Relaciones Exteriores de Chicago:

Deberíamos frenar la tendencia a identificar los intereses del gobierno de los Estados Unidos con los intereses de las inversiones privadas norteamericanas... Debemos tener presente que el experimento socialista chileno es, por último, decisión chilena.

Pero al fin de cuentas, el Ejecutivo continuaba poniendo en práctica su propia política exterior. Cuando el impulso del Congreso coincidía con el del Ejecutivo, se presentaba a la opinión parlamentaria como "presionando" a tomar medidas —es decir, a realizar lo que los creadores de la política del Ejecutivo ya estaban planeando efectuar. Por ejemplo, edecanes presidenciales anunciaron que la proclamación por parte del presidente Nixon de una "línea dura" hacia las expropiaciones tenía por objeto "evitar la acción del Congreso".

Bancos privados

Como cabía esperar, la política de línea dura del Ejecutivo tuvo gran influencia en la decisión de los bancos privados norteameri-

canos de cortar las líneas de crédito chilenas. Un alto ejecutivo de un banco neoyorquino manifestó en una entrevista: "La actitud del gobierno norteamericano influye considerablemente en nosotros —no podría ser de otro modo."

En el pasado, Chile había contado con más de 220 millones de dólares en líneas de crédito a corto plazo de los bancos norteamericanos; el gobierno de Allende pudo disponer de menos de 35. La negativa del Eximbank a garantizar préstamos a Chile reintroducía un elemento arriesgado para los banqueros privados, acostumbrados durante mucho tiempo a que los contribuyentes del fisco norteamericano cubrieran cualquier pérdida posible. Además, la relación institucional y financiera entre los bancos y las compañías del cobre y otras empresas, cuyo activo fue nacionalizado, indudablemente también tuvo algo que ver con el bloqueo invisible financiero. Cinco grandes instituciones bancarias suspendieron el crédito a Chile: el Chase Manhattan, el Chemical, el First National City, el Manufacturers Hanover y el Morgan Guarantee. Las dos primeras estaban estrechamente vinculadas con la Anaconda (el presidente de Anaconda había sido antes funcionario del Chase Manhattan, y un miembro de la Junta Asesora del Chemical es actualmente vicepresidente de Anaconda). Es interesante observar que los bancos europeos se mostraron mucho más flexibles y dispuestos a conceder créditos a corto plazo que los norteamericanos.

Programas de ayuda

Además de la supresión del crédito comercial y los préstamos "multilaterales", el Ejecutivo procedió a suspender los programas de ayuda a Chile. Los préstamos de USAID a Chile el año anterior a la elección de Allende sumaron un total de 15 millones de dólares, algo menos que de costumbre, dado que los precios inusitadamente elevados del cobre habían permitido al país acumular un pequeño saldo positivo de reserva.

Desde 1946, Chile había recibido 540 millones de dólares de préstamos "para el desarrollo" de las agencias norteamericanas de ayuda. Esos enormes préstamos destinados a ayuda tenían el objeto de mantener a Chile abierto para las inversiones extranjeras, sostener a los gobiernos y "comprar" a los chilenos descontentos.*

* Como fuente documental, véase, para citar sólo una, las actas del Subcomité sobre Gastos en Ayuda Exterior del Comité sobre Operaciones Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, 1966, p. 106 y *passim*. El senador Gruening, presidente, expuso: "Evidentemente, el paquete de asistencia de 1964 (programa de préstamos

Desde la elección de Allende, Chile no recibió un solo préstamo más de ayuda. Sin embargo, la administración allendista heredó una abultada deuda con la USAID: en junio de 1971, Chile debía alrededor de 500 millones pagaderos en dólares y 30 en escudos. Por lo general, los países subdesarrollados sólo pueden hacer frente a los pagos de préstamos anteriores por medio de nuevos préstamos. El gobierno de los Estados Unidos sabía que la no concesión de nuevos créditos prácticamente imposibilitaría al gobierno de Allende atender sus problemas fiscales.

Hubo dos "excepciones" al embargo de la ayuda, pero ambas fueron totalmente coherentes con la intención de la política general. USAID continuó con un programa de "asistencia técnica" de donaciones (no préstamos) que sería utilizado en el entrenamiento de "chilenos escogidos" en administración urbana y desarrollo rural para promover ciertos "proyectos de ayuda propia en pequeña escala", y para financiar visitas e intercambios dirigidos por el American Institute for Free Labor Development (AIFLD). Según los registros del AIFLD, parece ser que durante la administración de Allende los fondos se destinaron a los sindicatos marítimos, profesionales y de las líneas aéreas, que eran sindicatos activamente comprometidos en los esfuerzos para causar desorganización económica, social y política en Chile. Por ejemplo, el secretario del Comando Nacional para la Defensa de los Gremios (y un gremio no es lo mismo que un sindicato), el comité coordinador derechista militante de las dos grandes "huelgas de jefes", recibió en diciembre de 1972 una invitación para inscribirse en el programa avanzado de economía laboral que se llevaría a cabo en la Universidad George Washington en la primavera de 1973. Irónica pero predeciblemente, la continuación de esos programas se justificaba sobre la base de que eran "humanitarios" y "entre los pueblos", y por lo tanto, eximidos por la cláusula "humanitaria" de la política de línea dura de Nixon.

La otra brillante excepción a la política de suspensión del auxilio fue la ayuda militar. Entre 1950 y 1970, Chile recibió más ayuda militar que cualquier otro país latinoamericano, salvo el Brasil. En el año fiscal de 1970 (el último presupuesto de ayuda militar anterior a la elección de Allende) la contribución ascendió a 800 mil dólares (cifra excepcionalmente baja; lo más "normal" era algo más de 4 millones). El presupuesto de 1971 se elevó bruscamente a 5.7 millones; en 1972 ascendió aún más, a 12.3 millones, lo cual

por 55 millones de dólares; línea de crédito en el Export-Import Bank por 15 millones de dólares; acuerdo de intercambio con el Tesoro por 15 millones de dólares) debe haberse basado exclusivamente en consideraciones políticas..."

—hasta la llegada del gobierno militar— se consideraba como cifra aproximada para 1973.

Renegociación de deudas

En noviembre de 1971, considerando la escasez de intercambio exterior —debida en parte al descenso de los precios del cobre—, el gobierno chileno se vio obligado a declarar una moratoria en sus pagos de la deuda externa. Chile solicitó que se establecieran nuevos plazos para sus deudas restantes de 1971 y los 414 millones de dólares estimados para 1972. De otro modo, la amortización de deudas hubiera insumido más de la tercera parte del total de los beneficios del comercio exterior. La concesión de nuevos plazos a países subdesarrollados —muchos de los cuales con frecuencia descubren que los nuevos empréstitos no alcanzan siquiera a las deudas por intereses de préstamos anteriores— no es nada raro. Para obtener nuevos plazos, generalmente el país debe abrirse aún más a la propiedad extranjera. El gobierno de Frei obtuvo un aplazamiento de la deuda en 1965. La facilidad con que el gobierno de Frei consiguió la moratoria demuestra de nuevo que el problema fundamental no era el estado de la economía chilena, sino su tratamiento de las inversiones extranjeras.

Durante las reuniones del "Club de París", efectuadas a comienzos de 1972, en las que los acreedores europeos y norteamericanos se encontraron con los negociadores chilenos, los Estados Unidos trataron de bloquear la renegociación. Entre otras tácticas, utilizaron la demora, la insistencia en un acuerdo formal de **stand by**, por el cual Chile esencialmente abandonaría su programa populista para adoptar una política monetaria ortodoxa, y cedería a la exigencia de compensación previa para las empresas del cobre. Una vez más parece haber existido un considerable apoyo europeo a Chile. Por último, los Estados Unidos se vieron obligados a abandonar su oposición a la renegociación; las naciones acreedoras acordaron renegociar el 70 por ciento de la deuda. Después de llegar a un acuerdo sobre los principios fundamentales de la renegociación, Chile procedió a tratar los detalles en forma bilateral con los diversos países implicados. Más de un año después, los Estados Unidos eran el único país que no había firmado formalmente acuerdos bilaterales de renegociación, aunque los arreglos se habían prolongado varios meses.

Las transnacionales se adhieren

Los memoranda conspiratorios de la ITT en contra del gobierno chileno ya son muy conocidos, en parte debido a las recientes

audiencias del Senado norteamericano. Varios de ellos indican un fuerte disgusto con la línea inicial más blanda del Departamento de Estado. En un momento determinado, John McCone, de la ITT (anteriormente jefe de la CIA) llegó hasta ofrecer a Kissinger un millón de dólares si lograba que las agencias del Ejecutivo en general y la CIA en particular adoptaran una línea más dura con respecto a Chile. Independientemente o no, el plan de las agencias del Ejecutivo resultó ser muy similar al que el vicepresidente de la ITT y cabildero de Wáshington, William R. Merriam, propusiera en una carta fechada el 1 de octubre de 1971 a Peter Peterson —entonces asistente del presidente para Asuntos Económicos Internacionales. Merriam preconizaba un “acoso económico” a Chile mediante la negación de créditos internacionales y la prohibición de las importaciones de cobre y otras exportaciones vitales para Chile con el fin de crear un “caos económico” suficiente para convencer a las Fuerzas Armadas de “intervenir para restablecer el orden”. También propuso que la CIA ayudara en el proceso.

Según los documentos de la ITT, al principio, algunas empresas de base norteamericana estaban ansiosas por no comprometerse en las conspiraciones de la ITT; en parte, temían precipitar nuevas expropiaciones y perder su derecho a compensaciones por actividades ilegales. Pero hay pruebas crecientes de que varias empresas importantes de base norteamericana se asociaron sin reservas con la guerra económica del Ejecutivo norteamericano contra Chile, una vez que la táctica de la línea dura se había definido plenamente. Esa cooperación no es nada sorprendente, dado el traslape de personal entre el Ejecutivo y los principales bancos y empresas.

En febrero de 1972 la Kennecott Corporation “embargó” las cuentas de varias agencias del gobierno chileno que operaban desde Nueva York, incluyendo a la CORFO (Corporación de Fomento) y a la CODELCO (Corporación del Cobre). La Kennecott efectuó esa operación con el objeto de obligar a Chile a pagar préstamos que ascendían a 92 millones de dólares, obtenidos bajo el acuerdo de “chilenización” de 1967. Chile siempre había tenido intención de pagarlos, pero no cumplió con el primer pago (que debía hacerse en diciembre de 1971) debido a complicados procedimientos legales que tuvieron lugar en su interior.* El gobierno chileno pagó efectivamente la cuota de marzo y la Kennecott abandonó el caso; la Anaconda emprendió acciones similares contra propiedades chilenas; con sus almacenes neoyorquinos

* La enmienda constitucional aprobada por unanimidad que nacionalizó las existencias de cobre ordenaba al gobierno pagar únicamente los préstamos que hubieran sido invertidos de manera útil. Los procesos de tribunales superiores que determinarían cuáles préstamos deberían pagarse llevaron bastante tiempo.

embargados, CODELCO tuvo que desviar sus compras hacia otros puertos. El efecto de esos embargos fue poner en un peligro aún mayor el crédito de Chile en los Estados Unidos.

El 30 de septiembre de 1972 la Kennecott solicitó a un tribunal francés que bloqueara los pagos a Chile de cobre vendido en Francia, afirmando ser aún propietaria legal del 49 por ciento del cobre. Para evitar el embargo del pago de 1 330 000 dólares, los obreros portuarios franceses, en solidaridad con los trabajadores chilenos, se negaron a descargar el cobre. El barco se dirigió entonces a Holanda, donde inmediatamente se vio envuelto en una nueva serie de acciones legales. (Por último, a fines de octubre, el barco volvió al Havre a descargar su discutido cargamento). Los pagos por el cobre a Chile fueron embargados hasta la espera de la decisión del tribunal. Chile se vio obligado a suspender los envíos de cobre a Francia. La batalla legal se extendió por Europa: la Kennecott emprendió la misma acción en tribunales suecos, alemanes e italianos.

Esta ofensiva legal europea fue conducida por la Kennecott de una forma militar. La revista **Time** informó: "Los funcionarios de la Kennecott están resueltos a mantener la presión sobre Chile. La oficina neoyorquina del asesor general Pierce McCreary, que dirige la campaña, parece una oficina de guerra. Su escritorio está cubierto de informes de embarque, y sobre una pared cuelga un gran mapa para marcar el curso de los barcos."

El 29 de noviembre de 1972, el tribunal francés resolvió que no podía determinar si la expropiación era ilegal o no; se iniciaron acciones para una revisión completa del caso. Así, el país andino sólo podía vender cobre a clientes franceses con la obligación de pagar a la Kennecott si el tribunal apoyaba la afirmación de esta compañía de que el cobre era suyo y no chileno.

El objetivo de la estrategia de la Kennecott era presionar a Chile para que entrara en negociaciones, privándolo de los beneficios del cobre y si era posible también de mercado para ese producto. En realidad, sus abogados no esperaban obtener el equivalente de la compensación mediante la exacción de su parte en las ventas de cobre a través de acciones legales en toda Europa. Incluso, en su resumen ante el tribunal francés, los abogados de la Kennecott admitieron que su acción era un ejercicio "para enseñarle a Chile las realidades políticas de la vida". La Kennecott sabía que su acción tendría los siguientes efectos sobre Chile: pérdida de francos a corto plazo; intimidación de otros compradores de cobre, exponiendo los pedidos futuros; eliminación de las posibilidades de crédito basadas en el descuento de futuras ventas de cobre, obligando además a Chile a gastar moneda extranjera en costos legales generados en Europa.

La estrategia de la Kennecott tuvo cierto éxito. Durante los meses de octubre y noviembre, las ventas de cobre se detuvieron, y Chile tuvo que suspender varios embarques. Además, las acciones de la Kennecott llegaron en el momento en que el país andino estaba negociando nuevos contratos de cobre y los potenciales compradores vacilaban en adquirir cobre "complicado", que podría llevar a litigios y retardar así sus planes de producción. El hecho más perjudicial fue el impacto sobre la negociación de 220 millones de dólares en líneas de crédito, que Chile estaba discutiendo con bancos europeos. Como consecuencia del embargo, esas líneas nunca se abrieron. Además de eso, las líneas de crédito holandesa y canadiense fueron clausuradas a causa de que Chile ya representaba un riesgo mayor. Finalmente, Chile fue obligado a gastar más de 150 000 dólares para librar su batalla legal contra el embargo.

Mis propias entrevistas a funcionarios gubernamentales chilenos en julio de 1973 confirmaban que, en formas más sutiles, muchas empresas estaban sometiendo a Chile a un "acoso" similar al reconocido por la ITT. En general, las empresas exigían pagos al contado por adelantado (en lugar del habitual plazo de 30 a 120 días de gracia), pago en bancos europeos (en monedas europeas), precios más altos, ventas ligadas (con frecuencia seis u ocho productos adicionales indeseados —la Esso actuó repetidamente en ese sentido—), etcétera. Aun cuando Chile cumplía las condiciones, los pedidos de repuestos de maquinaria esenciales se demoraban, se enmarañaban en la burocracia o quedaban sin respuesta. Como me comentó un asesor del presidente Allende, Juan Garcez, todo eso representaba mucho más que asegurarse contra riesgos financieros; era un embargo de "perfil bajo".

El ministro de Minas Sergio Bitar me comunicó que aún después de someterse a las condiciones extraordinarias mencionadas antes para obtener maquinaria, en muchas ocasiones todavía resultaba imposible hallar vendedor. Citó el caso de la tentativa de la Compañía Chilena del Cobre de comprar camiones pesados por varios millones de dólares pagaderos al contado. Al principio la compañía aceptó venderlos, pero luego dio marcha atrás. Bitar afirmó que el cambio de opinión se debía a la amenaza de la Anaconda de no volver a comprar nunca a la compañía australiana si ésta vendía algo a Chile alguna vez.

Entrevistas realizadas en Petro Dow (intervenida por el gobierno cuando dejó de abastecer el mercado) revelaron que era imposible comprar refacciones debido a que todos los fabricantes tenían licencias de Dow Chemical de Midland, Michigan. Sin duda, las empresas tratarían de defenderse argumentando que son dueñas de vender a quien les parezca. La experiencia chilena

demuestra en forma dramática el poder de vida o muerte que poseen empresas que, por su parte, no tienen que rendir cuentas a nadie.

No era fácil para los de afuera estimar el grado de coordinación entre las transnacionales y las agencias del Ejecutivo norteamericano. En el caso de la guerra de la Kennecott contra Chile, el Departamento de Estado generalmente argumentaba que esa compañía sólo había ejercido sus derechos legales como cualquier "ciudadano" sujeto a la Constitución; pero cuando un reportero de **Forbes** preguntó si había habido alguna consulta entre la Kennecott y el Departamento de Estado, un portavoz de éste respondió: "Claro, de vez en cuando nos ponemos en contacto. Ellos conocen nuestra posición." El reportero de **Forbes** preguntó entonces: "¿Y cuál es?" El portavoz replicó: "Estamos interesados en solucionar problemas. Y no se solucionan sentándose sobre las manos."

En realidad, la cuestión de la conspiración entre el gobierno y las transnacionales es puramente académica. Sus políticas han sido plenamente complementarias y para Chile eso es lo único que importa. Han compartido los mismos objetivos y funcionado en base a las mismas premisas de acción punitiva y presiones coercitivas disfrazadas de acciones legales y financieras legítimas.

Todo lo anterior es evidencia documentada de que el gobierno norteamericano se comprometió muy profunda —y abiertamente— con su papel en el derrocamiento del gobierno de Allende. Dado el hecho de la existencia misma de la superfinanciada CIA, la evidencia histórica de sus intervenciones en la política chilena, y las numerosas pruebas circunstanciales de su participación desde la elección de Allende, cabe hacer conjeturas sobre operaciones secretas norteamericanas encaminadas a organizar el golpe. Para muchos, la cuestión no es si la CIA estuvo implicada en forma directa, sino más bien de qué manera exactamente. Ya han trascendido algunos fragmentos del testimonio del director de la CIA, William Colby, efectuado en sesiones a puertas cerradas referentes a Chile el 11 de octubre de 1973: "...la conducción de este tipo de operaciones se basa en el supuesto de que son operaciones clandestinas y la mano de los Estados Unidos no debe ser visible. Por esa razón, nosotros los de la rama ejecutiva limitamos muy severamente todo conocimiento de este tipo de operaciones y empleamos procedimientos tendientes a que muy pocas personas se enteren de cualquier operación de esta naturaleza".

Tendrán que pasar años para que se llegue a conocer toda la historia; las agencias ejecutivas tienen mucha experiencia en el ocultamiento de operaciones clandestinas —por lo menos, lo harán por algún tiempo. Siendo evidente el bloque invisible, esas

acciones ocultas —aunque evidentemente podrían formar parte de la táctica del “perfil bajo”— podrían ser consideradas, en sentido real, como otra variedad de matanza preventiva.

Una guerra desenmascarada contra Chile estaba en la agenda de los Estados Unidos. El país andino estaba en la vanguardia de las fuerzas antiimperialistas en América Latina —como lo declaró el propio Kissinger poco después de la elección de Allende (16 de septiembre de 1970). Amenazaba seriamente con convertirse en un modelo de desarrollo independiente. El gobierno de Allende no caía en la retórica nacionalista simplista, sino que hablaba en forma radical, clara y pragmática. Estaba trabajando mucho por elevar la conciencia en los Estados Unidos, en la OEA y en otras partes sobre otras formas de dominación —particularmente las empresas transnacionales— que amenazan a los pueblos y las naciones de todo el mundo. Era “necesario” para los creadores de la política ejecutiva norteamericana hacer de Chile “un ejemplo”.

Desde el mismo día de nuestro triunfo electoral, el 4 de septiembre de 1970, hemos sentido los efectos de una presión externa en gran escala contra nosotros, que trataba de impedir la toma de posesión de un gobierno libremente elegido por el pueblo, y que ha intentado quebrarlo desde entonces; una acción que ha tratado de aislarnos del mundo, estrangular nuestra economía y paralizar la comercialización de nuestro principal producto de exportación, el cobre, e impedirnos el acceso a las fuentes de financiamiento internacional.

Tenemos conciencia de que cuando denunciemos el bloqueo financiero y económico aplicado contra nosotros, es un poco difícil para la opinión pública mundial, y aun para algunos de nuestros conciudadanos, entender lo que queremos decir. Esa agresión no es abierta y no ha sido abiertamente declarada al mundo; por el contrario, es una forma de agresión oblicua, solapada, indirecta, aunque eso no la hace menos perjudicial para Chile.

Salvador Allende

(Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas,
4 de diciembre de 1972.)